



GREEN EUROPEAN
FOUNDATION

nous
horitzons
fundació

La Economía Corporativista y el Estado Niñera



HEINRICH BÖLL STIFTUNG
UNIÓN EUROPEA

Sobre el autor:

Gerhard Schick es un economista y político alemán. Schick se afilió al Alianza90/Los Verdes en 1996 y fue elegido miembro del Parlamento Alemán en el 2005. Desde el año 2013 es el Presidente del Comité de Finanzas del Bundestag. Además, ha sido miembro del organismo parlamentario sobre el mercado financiero. Gerhard Schick es Doctor en finanzas por la Universidad de Freiburg, Alemania.

Título original: "Machtwirtschaft Nein Danke! Für eine Wirtschaft die uns allen dient", publicado por Campus Verlag (Frankfurt, 2014).

Publicación: Diciembre 2015

La Fundación Verde Europea (Green European Foundation, GEF, de sus siglas en inglés) es una fundación política de ámbito europeo, financiada por el Parlamento Europeo.

www.gef.eu

Coordinación: Ioana Banach, Green European Foundation

Traducción: Sergio Alegre, Fundació Nous Horitzons

Producción: Micheline Gutman

Traducción hecha por la Fundación Verde Europea con el apoyo de la Fundació Nous Horitzons. Con el apoyo económico del Parlamento Europeo a la Fundación Verde Europea.

Índice

1	Un dilema político	4
2	El fracaso de los agentes estatales	5
2.1	Evasión de impuestos	5
2.2	El rescate de los bancos	6
2.3	La construcción de infraestructuras	8
	Ejemplos de Alemania	8
	Ejemplos de España	8
3	Buscando las causas	9
3.1	Beneficios para unos pocos a costa de la mayoría	9
3.2	Captura de la regulación	10
3.3	Una simbiosis peligrosa	10
4	Salidas al dilema	11
4.1	Izquierda contra derecha, el debate erróneo	11
4.2	El control del poder del Estado	12
	Tiempo para políticas progresistas en Europa	12
	Cambiando el equilibrio de poder	12
	Participación pública y conocimiento independiente	13
	Mayor transparencia	13
5	Más Estado para contener a un mercado más fuerte	15

1 Un dilema político

¿Hasta qué punto debe intervenir el Estado en la economía? Los debates políticos sobre esta cuestión suelen llevar a una falsa dicotomía. Pensamos por anticipado que la izquierda favorece un alto nivel de intervención, mientras que asociamos a los conservadores a la libertad de mercado. La es errónea y además obvia el punto esencial. La cuestión clave no es el nivel de intervención sino la naturaleza de la legislación que debemos adoptar para servir mejor a los intereses de la mayoría.

Reducir las normas estatales no sirve para liberar a los mercados, de hecho tiene un efecto opuesto: refuerza el poder de unas pocas corporaciones gigantes. El supuesto remedio –la intervención estatal– fracasa muchas veces. Mediante la pasividad, los gobiernos causan a menudo situaciones que empeoran la situación en vez de remediarla. Una rápida ojeada a la mentalidad de los bancos estatales durante la reciente crisis financiera es suficiente para sembrar la semilla de la duda sobre sus capacidades para gestionar de forma efectiva los riesgos y servir a la economía en vez de a sus colegas privados. Demasiado a menudo, los actores estatales toman medidas que no benefician la mayoría sino a las grandes empresas. En consecuencia, el Estado no está en disposición de asegurar una competencia justa. Sus poderes regulatorios parecen ser tan limitados que las políticas económicas no cambian de un gobierno a otro. Por ello, no es sorprendente que los partidos de izquierda no tengan buena acogida cuando apelan a una mayor intervención estatal.

La razón del fracaso del Estado para satisfacer las necesidades de la mayoría de sus ciudadanos radica en que el equilibrio de poder entre el Estado y los agentes económicos se ha roto. La economía de mercado se ha transformado en una economía corporativista.¹ En economías de mercado el Estado actúa como un regulador independiente que asegura la competencia económica. Cuando poderosos grupos de interés financiero son capaces de ejercer una presión enorme sobre el Estado, sus servidores tienen la tendencia de alinearse con dichos grupos y no con la mayoría de sus ciudadanos. Este es especialmente el caso cuando las complejidades de la acción política sobrepasan

la competencia de los gobiernos, siendo así que dependen del conocimiento de grupos de intereses externos.

Esto conduce a un notable dilema político. Muchos ciudadanos han perdido su confianza en los gobiernos y los políticos porque han asumido que el Estado está a favor de los ricos (con aquellos que tienen el poder económico).² Aumentar la regulación no es, por tanto, una opción ya que los actores públicos no parecen ni querer ni poder legislar en beneficio de la gente.

Comparto la idea de que el Estado está sirviendo los intereses equivocados en muchas cuestiones. El Estado ha fracasado en regular la economía de mercado como se ha evidenciado en la pasada crisis financiera. Necesitamos, por tanto, una estrategia política innovadora que tenga un nuevo enfoque para equilibrar la economía y el Estado (que gobierna la economía). Como ciudadanos, debemos reclamar y asegurarnos que el Estado sirve a nuestros intereses, los de la gente y no los de la economía corporativista.

De igual manera que hicieron los progresistas en Estados Unidos en el cambio de siglo, estas nuevas políticas deben promover la existencia de un Estado con un poder regulador capaz de trascender a las grandes corporaciones. Para hacer que sean capaces de que nos defiendan políticamente delante de oscuros intereses el proceso en la toma de decisiones debe ser más transparente, asegurándonos así de que nuestros gobiernos son objeto de escrutinio y seguimiento tanto por parte de los partidos políticos de la oposición como de la opinión pública. Los empleados de nuestras instituciones públicas deben estar preparados para enfrentarse a representantes de grandes corporaciones en un plano de igualdad.

La adopción de una estrategia nueva y progresista debe tener como último fin la generación de más competencia en nuestras economías para poder controlar la economía corporativa. Los gobiernos no pueden ser responsables de planificar toda la actividad económica. Debemos fijar las reglas que aseguren que lo que generen los mercados sirva a nuestros intereses.

1 Schick, Gerhard. 2013. *Machtwirtschaft – Nein Danke!* Campus Verlag.

2 ISF München (2012): *Krisenerfahrung und Politik*, p.61.

Finalmente, este nuevo movimiento progresivo sólo puede ser europeo. Dada la complejidad política y económica de nuestro continente, debemos unir fuerzas. Si queremos que los reguladores públicos estén en condiciones de igualdad con los representantes del mercado, debemos actuar a nivel europeo. Las normas deben ser aplicables a nivel europeo,

sólo entonces podremos evitar que el Estado sufra un proceso degenerativo para convertirse en el “proveedor de servicios” de la economía corporativa. Este aspecto es esencial para asegurar que el Estado puede trabajar otra vez al servicio de los ciudadanos.

2 El fracaso de los representantes públicos

La crisis financiera proporcionó muchos ejemplos de fracasos mercantiles: incompetencia y codicia de los gestores, estafas y delitos económicos. La primera, y casi automática, respuesta es pedir más regulaciones, la nacionalización de los bancos o “más Estado”. Sin embargo, estas propuestas no son acogidas con gran entusiasmo dados los recientes y numerosos casos de fracaso de los Estados en la regulación de las instituciones económicas. En mi opinión, es incluso peor: los bancos públicos fueron creados específicamente como antídoto de la codicia de los mercados, pero ahora debemos reconocer que no actuaron mejor que los privados. En teoría, gravamos los beneficios de tal manera que el coste de los servicios públicos está financiado de forma justa y la concentración de capital es corregida por la redistribución de la riqueza, pero vemos que el sistema fiscal es, de hecho, usado para redistribuir la riqueza exactamente en la dirección contraria: de abajo arriba, del pequeño al grande. Esto es indignante!

2.1 Evasión de impuestos

Los impuestos son usados para redistribuir la riqueza y financiar las infraestructuras y servicios públicos. Sin ellos no se podrían construir carreteras y líneas de ferrocarril. No habría policía para garantizar nuestra seguridad, los programas de bienestar social no existirían. Todos participamos del sistema porque todos nos beneficiamos de él. Por eso es muy enojoso cuando las compañías se benefician enormemente de este consenso y hacen todo lo posible por ocultar sus ingresos al Estado y así evitar pagar su parte.

En Noviembre de 2014, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que entre el 2002 y el

2010, más de 340 corporaciones multinacionales entre las que se incluían Amazon, Deutsche Bank, Pepsi e Ikea habían evadido impuestos en Luxemburgo.³ Con la participación entusiasta de las Cuatro Grandes (PwC, KPMG, Ernest&Young y Deloitte) se desarrollaron diferentes procedimientos que hicieron posible retirar los beneficios de países europeos sin pagar impuestos con el total conocimiento y cooperación de las autoridades de Luxemburgo.

El ejemplo de Apple ilustra hasta que nivel estas corporaciones inculcan sistemáticamente las normas fiscales europeas para sus propios intereses.⁴ Da la impresión que la capacidad innovadora de Apple no se circunscribe únicamente al ámbito de los ordenadores y las tablets, parece que también tienen una gran capacidad cuando se trata de evadir impuestos. Tim Jenkins, director financiero de Apple en los años ochenta y noventa, explica que la empresa acertó creando un mecanismo que se ha bautizado como “un doble irlandés con un sándwich holandés” desde finales de los ochenta. Gracias a ese mecanismo, los impuestos que Apple pagó pueden ser considerados como “maneables”. En el 2011, Apple pagó sólo tres mil trescientos millones de dólares de impuestos sobre unos beneficios de 34 mil doscientos millones, lo que representa un escaso 9.8%.

Todas estas acciones son completamente legales, pero son posibles por leyes fiscales europeas que están muy cerca del 0%. Nadie en los círculos fiscales se sorprendió por el “caso Luxemburgo”. Lo que es nuevo no es que se haya sido permisible con la evasión de impuestos durante décadas, sino que ahora la documentación está disponible y por tanto sabemos quiénes y cómo lo han hecho. Durante años, los gobiernos europeos han dejado que las grandes corporaciones se

³ <http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks> (1.12.14).

⁴ En 2012, el *New York Times* llevó a cabo una profunda investigación en el lado oscuro de la empresa con la mayor fortuna del mundo y ganó un Pulitzer por el reportaje. Uno de los artículos de la serie trataba a fondo la evasión de impuestos. Las innovaciones de Apple y el continuado éxito económico había llevado a la empresa a multiplicar sus ganancias de forma increíble. “How Apple Sidesteps Billions in Taxes”, *New York Times*, 29.4.12.

hayan excusado en la práctica de pagar sus impuestos a costa de otros contribuyentes (pequeños empresarios y trabajadores). Es decir, que las regulaciones fiscales han permitido que las grandes corporaciones tengan ventajas competitivas notables. Gracias a esto, el Estado ha facilitado la distorsión de los mercados en favor de las grandes compañías.

Si hablamos de acuerdos bancarios ilegales, la situación es aún peor. En su libro, *Ces 600 milliards qui manquent à la France* (Los 600 mil millones que le faltan a Francia), Antoine Peillon muestra una clara descripción de como UBS ha persuadido de forma sistemática a empresarios y políticos franceses a transferir secretamente sus capitales a Suiza. UBS redactó una guía para sus 120 asesores que incluía los mejores consejos sobre cómo evitar las normas fiscales francesas. En el curso de su investigación, el periodista tuvo acceso a documentos secretos de las autoridades francesas y del propio banco. Esto le permitió calcular las pérdidas que había sufrido el erario público. Alrededor de 600 mil millones de euros, más de la mitad de todos los ingresos anuales, se perdieron gracias a las actividades de los banqueros suizos. La cuestión más sorprendente de sus resultados no fue que la gente intentara sortear los impuestos franceses y, por tanto, defraudar a los ciudadanos de Francia. Lo que es absolutamente intolerable es que se nos explica que las autoridades francesas recibieron pruebas claras de estas prácticas y no hicieron nada para pararlas. Importantes políticos estuvieron personalmente involucrados en estos acuerdos y bloquearon las investigaciones. Sólo fue por la presión pública que el Estado empezó a actuar contra la filial francesa de UBS.⁵

El último gran escándalo en Alemania fue el llamado “acuerdos cum/ex”. Este no fue sólo un caso de grandes corporaciones o millonarios pagando menos impuestos de los que señala la ley. Fue mucho peor que eso: la agencia tributaria se convirtió en el medio por el que los super-ricos robaron aproximadamente 12 mil millones de euros a la gente de la calle. El Estado simplemente se quedó de brazos cruzados en una redistribución de riqueza de abajo arriba.

Muchos aspectos de este caso son remarcables. En primer lugar, los “inversores” (millonarios y bancos actuando

de forma independiente) no mostraron ningún tipo de arrepentimiento. Para ellos era un negocio totalmente normal engañar al conjunto de la sociedad. En la actualidad los inversores se quejan de que serán objeto de una caza de brujas si el Estado intenta que devuelvan el dinero y están lanzando miles de quejas espurias en un intento de acallar a los agentes fiscales y retrasar los juicios.⁶

En segundo lugar, y lo que es más lamentable, buena parte de la responsabilidad por este caso recae en los gobernantes. El gobierno conocía desde hacía tiempo las lagunas en la legislación. Ya en el 2002, el ministro de finanzas socialdemócrata, Hans Eichel, fue informado de estos agujeros por parte de la Asociación de la Banca Alemana y no hizo absolutamente nada. Tuvieron que pasar cinco años para que se diera el primer paso, una reforma legislativa que permitió continuar con dichas prácticas. Los inversores siguieron engañando a todo el mundo hasta que diez años después se legisló correctamente y poniendo fin a esta situación.⁷ Hasta el momento no se ha podido dilucidar si fue una cuestión de ignorancia e incompetencia o se debió a una acción deliberada para ayudar a los bancos y a los super-ricos.

Por último, los bancos públicos, entre ellos una larga lista de bancos regionales alemanes incluyendo HSH Nordbank, WestLB y LBBW*, se aprovecharon intensamente de estos resquicios e hicieron lo mismo con sus clientes ricos. Bancos en manos públicas ayudaron a millonarios a aprovecharse de las arcas públicas; es decir, el Estado engañó a sus propios ciudadanos en beneficio de los super-ricos. De forma incidental, algo similar ocurrió con los acuerdos de créditos de intercambio, en los que los bancos regionales hicieron el trabajo sucio con las autoridades regionales –en realidad al contribuyente lo estaban engañando– o en los mercados financieros.⁸

2.2 Rescatando a los bancos

El rescate de los bancos europeos es otro ejemplo de la distribución de la riqueza de los pobres a los ricos. Ha beneficiado los intereses de los adinerados a costa de los contribuyentes ordinarios.⁹ Si se les pregunta a los ciudadanos

5 French Criminal Tax Probe Of UBS – Talk About Déjà Vu, Forbes, 6.4.2013, <http://www.forbes.com/sites/robertwood/2013/06/04/french-criminal-tax-probe-of-ubs-talk-about-deja-vu/> (7.1.14).

6 “Fiskus fordert jetzt erbarmungslos Geld zurück”, Die Welt, 24.11.2014.

7 Banken warnten Regierung vor Milliarden-Steuerbetrug”, Süddeutsche Zeitung. 12.06.2014.

8 Schick, Gerhard. 2013. *Machtwirtschaft – Nein danke!* Campus Verlag. Kapitel 3.

9 Sobre una distribución similar de riqueza de los pobres a los ricos a través de la flexibilización cuantitativa véase: Schnabal, Gunther. 2014.

“Negative Umverteilungseffekte und Reallohn-repression durch unkonventionelle Geldpolitik”. *Zeitschrift für Wirtschaftspolitik*, 94 (11), pp. 792-797.

alemanes que digan quién está rescatando a quién en Europa, la respuesta inmediata será que Alemania, en primer lugar y la que más, está ayudando a Irlanda, España, Portugal y Grecia. Pero si les pregunta a los ciudadanos de los países donde la crisis es más dura, la respuesta es completamente diferente. ¿Es un mundo al revés? ¿Están los que parecen ser los rescatados en realidad rescatando al rescatador? ¿Son los que están supuestamente haciendo el rescate los que son rescatados? Sigamos el movimiento del dinero.

Los bancos irlandeses invirtieron en una gran burbuja inmobiliaria. Cuando estalló, los bancos tuvieron pérdidas y los acreedores tuvieron que hacer frente a grandes pérdidas. Pero, ¿quién eran los acreedores? ¿Ahorradores irlandeses o quizás fondos de inversiones de riesgo? No exactamente. Solo los bancos alemanes habían invertido más de 100 mil millones de euros en Irlanda entre 2005 y 2008, una suma equivalente a dos tercios del producto interior bruto de este pequeño país.¹⁰

Mientras que los acreedores fueron salvados de sufrir pérdidas cuando las deudas de los bancos fueron asumidas por el Estado, los mercados financieros tuvieron serios motivos para dudar de la estabilidad financiera del estado irlandés. Lo crean o no, el Estado asumió una deuda del sector financiero equivalente al 41.6% del PIB;¹¹ en Alemania esto hubiera equivalido a un billón cien mil millones de euros. Con este nivel de deuda, Irlanda sólo pudo obtener créditos en los mercados de capital con unos intereses muy altos. Esto explica porque Irlanda pudo situarse debajo del paraguas europeo y obtener el famoso rescate, que fue garantizado en parte por Alemania, pero no gratuitamente (con un interés entre el 5.5 y el 6.5%).¹² El rescate monetario fue en primer lugar al Estado, pero después fue a los bancos que pagaron a sus acreedores extranjeros, la mayoría alemanes. De esta forma, grandes cantidades de los créditos de emergencia acabaron en Alemania. Y se cerró el círculo. Irlanda se ha convertido en una inmensa “oficina de cambio” en la que miles de millones de euros aparecen

por un instante para volver al extranjero otra vez. Pero hay una gran diferencia: las deudas ahora han de ser pagadas por la gente de Irlanda mediante impuestos más altos o con recortes masivos del gasto público.¹³

Los economistas y políticos irlandeses están de acuerdo en que el rescate impuesto fue un gran error. Es fácil pensar que todo el mundo iba a aprender de esta experiencia pero en España, antes del verano de 2012, los presupuestos de educación, sanidad y bienestar social fueron drásticamente reducidos para rescatar a los bancos. Europa parecía un disco rayado. Primero el gobierno nacional garantizaba las deudas de los bancos, después se veía obligado a rescatar a instituciones y, finalmente, era incapaz de obtener suficientes fondos en los mercados de capital y tenía que pedir préstamos de urgencia a Europa.

Esta situación se hubiera podido evitar. Según expertos españoles, si los acreedores de los bancos enfermos hubieran hecho las aportaciones adecuadas, no hubiera habido la necesidad de recurrir al programa de rescate europeo.¹⁴ Esta también es la visión del Fondo Monetario Internacional como se refleja en su informe sobre España de noviembre de 2012. Y la ley de reestructuración pone los fundamentos para una mayor involucración de los acreedores.

En su momento, el FMI calculó cuánto apoyo había recibido el sector financiero por parte de los contribuyentes en países determinados. Entre el 2008 y el 2011, Alemania gastó más del 12% del PIB (316 mil millones de euros) en estabilizar los bancos infectados,¹⁵ más que el presupuesto anual del gobierno federal. En comparación, todo el dinero a nivel mundial para el desarrollo son 100 mil millones de euros. Los Estados Unidos, por otra parte, sólo se gastaron el 5% del PIB. Esta diferencia se debe a que más de 450 bancos regionales han cerrado desde el inicio de la crisis sin que sus deudas hayan sido transferidas al Estado. Es un ejemplo de como las cosas tendrían que haber ocurrido en Europa.

10 Guido Fawkes' Blog (2010): Is the ECB Forcing Ireland to Protect German Investments? <http://order-order.com/2010/10/15/anglo-irish-bondholders-should-take-the-losses-is-the-ecb-forcing-ireland-to-protect-german-investments/> (2.10.2013).

11 International Monetary Fund (2012): Taking Stock. A Progress Report on Fiscal Adjustment, p.53. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2012/02/pdf/fm1202.pdf> (2.10.2013).

12 Cf. La respuesta del Ministro de Finanzas irlandés, Michael Noonan, a un pregunta en el parlamento irlandés el 15.6.2011, p. 364. <http://debates.oireachtas.ie/dail/2011/06/15/unrevised2.pdf> (2.10.2013).

13 Este efecto se puede apreciar muy bien en el film de Harald Schumann y Árpád Bondy: “Staatsgeheimnis Bankenrettung” (Secreto de Estado: cómo fueron rescatados los bancos) (2013), por el que ganaron el Premio de la Televisión Alemana como mejor documental.

14 Credit Sights (2012): Bankia: What If the Bail-Out Had Been a Bail-In? Rallo, J.R. (2012): A Better Way to Save Spain's Banks. <http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303822204577464601755598634.html> (8.10.2013).

15 International Monetary Fund (2012): Fiscal Monitor (October), p. 42. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2012/02/pdf/fm1202.pdf> (8.10.2013).

Cuando sabemos que el 60% del dinero del mundo pertenece al 10% más rico,¹⁶ el rescate de los bancos acreedores europeos no ha sido únicamente “el mayor robo en toda la historia de la humanidad”¹⁷ sino que ha significado el programa más grande de redistribución de riqueza de los pobres a los ricos que jamás se haya emprendido en unos estados democráticos.

2.3 La construcción de infraestructuras

Los ejemplos del fracaso del Estado y del trato preferencial a las grandes empresas no es exclusivo del sector financiero, se pueden encontrar en otros muchos sectores. Uno en el que está bien documentado es el de la construcción. Aparte del Estado, pocos clientes aceptarían proyectos mal planificados, precios abultados, retrasos en la finalización y sobrecostes. La mala planificación no sólo ocurre en los países del Sur, como a algunos alemanes les gustaría pensar, también hay casos notorios en Alemania de mala ejecución de grandes proyectos de construcción.

Ejemplos alemanes

Aunque se debería haber inaugurado un nuevo aeropuerto en Berlín en el 2012, los pasajeros aún deben volar al aeropuerto de Tegel. La inauguración del aeropuerto fue inicialmente retrasada al 2013 y luego al 2014. Ahora se prevé que será en el 2017. Si hablas con cualquiera en Berlín sobre este proyecto, simplemente ladeará su cabeza. Como hay falta de inversiones en muchas áreas de Berlín, los ciudadanos se sienten especialmente agraviados cuando ven la evidente irresponsabilidad del senado de la ciudad** en relación a la gestión del proyecto en el que miles de millones de euros se han evaporado. En Agosto de 2013, se recopilaban más de 65.000 fallos en el aeropuerto.¹⁸ Los ciudadanos de Berlín tienen la impresión que la administración no está haciendo bien su trabajo. Pero igualmente graves son las innumerables excusas, el encubrimiento de errores de planificación y de problemas técnicos y –un tema clave– las continuas escaladas de costes. Las únicas respuestas posibles sólo pueden ser el enfado y el cinismo.

En Stuttgart, los ciudadanos reaccionaron con ira. La cuestión central en las protestas contra el proyecto

“Stuttgart 21” de construcción de una mega estación central –sin menoscabar la salvación de los árboles de los Jardines del Castillo, evitar la demolición de un ala de la actual estación y los debates sobre la seguridad del túnel que se tenía que construir– iba mucho más allá de la estación en sí: la gente estaba consternada y desalentada por la arrogancia de los responsables del proyecto y tenía la sensación de que habían sido totalmente apartada. El objetivo de las protestas fue la alianza de inmobiliarias, constructoras y políticos en apoyo al proyecto, que fue impuesto a la mayoría de la población que lo que tenía que pagar con sus impuestos. El hecho de que los costes estimados del antiguo gobierno regional y la Deutsche Bahn*** fueran erróneos durante años espoleó aún más las protestas. La Oficina Auditora Federal publicó de forma regular costes estimados mucho más altos que al final fueron los correctos. Por ello, los ciudadanos acabaron teniendo la impresión de que la información proporcionada por la empresa pública –que era la base sobre la que se tomaban las decisiones en el parlamento y gobierno regional– nunca fue correcta y que había algunas trampas encaminadas a satisfacer ciertos intereses. La disputa sobre Stuttgart 21 nunca hubiera tomado las dimensiones que tuvo si hubiera habido una política de transparencia. También se planteó la cuestión de si el gobierno y sus responsables estaban deliberadamente engañando a sus ciudadanos.

Ejemplos españoles

Otro ejemplo catastrófico de otro gran proyecto es el del aeropuerto de Ciudad Real. Se calculaba que tendría un volumen de 10 millones de pasajeros anuales cuando estuviera acabado en 2009 con su pista de 4 km (la más larga de España) que permitía la operatividad del A-380. El problema es que en 2012, sólo tres años después de su apertura, tuvo que ser cerrado por falta de demanda. En el 2010, en vez de los millones de pasajeros previstos, sólo tuvo unos 55.000. Lo que tampoco es una gran sorpresa ya que Ciudad Real sólo tiene 72.000 habitantes y está situada en Castilla-La Mancha, una zona eminentemente rural. La estimación de 20.000 puestos de trabajos asociados también fue muy optimista.¹⁹

Aunque el aeropuerto pudo haber sido al principio un proyecto privado, alrededor de 550 millones de euros públicos fueron invertidos en las infraestructuras a su

16 Deutsches Institut für Wirtschaft, 2014. Wochenbericht, Nr. 9.

http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.438708.de/14-9.pdf (7.1.2015).

17 Weik, Matthias und Marc Friedrich. 2012. Der größte Raubzug der Geschichte. Warum die Fleißigen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden. Tectum Verlag.

18 Tatje, C. (2013) Im Blindflug in *Die Zeit*, 14.8. <http://www.zeit.de/2013/34/ber-flughafen-maengel-mehdorn> (2.10.2013).

19 Don Quixote's phantom airport, *El País*, 31.10.11.

alrededor.²⁰ Los inversores no consiguieron los créditos necesarios ya que ningún banco consideró el proyecto viable. Pero la Caja de Castilla la Mancha, controlada por la administración, consideró lo contrario y asumió el 70% de las inversiones directas e indirectas del aeropuerto. El consejo de administración de la caja incluía políticos regionales de los dos principales partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Cualquiera

habría esperado que estos políticos conocieran la situación real y, por otra parte, parecía obvio que financiar el 70% del proyecto era excesivo. Un informe realizado durante el juicio por quiebra de la caja señalaba claramente que el proyecto fue desarrollado no para el beneficio de la mayoría de la población autóctona sino para las compañías constructoras del aeropuerto.²¹

3 Búsqueda de las causas

Nadie que sirve al Estado, sea un político o un alto cargo, se levanta de su cama por la mañana y piensa: “Hoy voy a hacer cosas que son realmente malas para la mayoría”. Pero aun así, el Estado es sistemáticamente cooptado para servir a intereses particulares y no al bien común. Entonces, ¿cómo es posible que suceda? Creo que hay dos causas principales. Por un lado, los profesionales del lobby están permanentemente presionando para obtener beneficios para las empresas que representan intentando minimizar así sus costes. Por otra, hay una simbiosis peligrosa entre el Estado y las grandes compañías. El desarrollo económico se sustenta en una ideología que debilita al Estado en el aspecto en el que debería ser más fuerte: la defensa de los intereses de los ciudadanos.

3.1 Beneficios para unos pocos a expensas de la mayoría

Los ámbitos del Estado no son un espacio foráneo para la economía corporativista. La estrategia de usar las instituciones para promover intereses particulares es muy beneficiosa. ¿Para qué esforzarse en conseguir más clientes si sale más a cuenta un cambio en la ley? ¿Para qué afrontar el desafío de la innovación y nuevas inversiones si el Estado puede proteger la tecnología obsoleta?

A esta estrategia los economistas la denominan “búsqueda de rentas” (conseguir privilegios o ventajas de la actividad del Estado). En el otro extremo nos encontramos con la “búsqueda de beneficios” (conseguir beneficios con la actividad en el mercado) a través de producir mejores

productos o de forma más eficiente. La “búsqueda de beneficios” es buena para los consumidores porque implica mejores productos o más baratos. “La búsqueda de rentas” no beneficia a terceros, de hecho a menudo los perjudica. Esto es así porque es una búsqueda de dinero sin dar nada a cambio. Los beneficios se obtienen sin añadir valor alguno, simplemente por el equilibrio de fuerzas en la sociedad. Esta no es una teoría de la conspiración, sino la conclusión de un análisis económico de Anne Krueger, antigua economista jefe del Banco Mundial y directora de operaciones del FMI.²²

¿Pero cómo se benefician unos pocos del daño causado a la mayoría? En “La lógica de las acciones colectivas”,²³ el economista Mancur Olson describe como pequeños grupos de interés son muy efectivos manipulando al Estado para sus propios intereses. La posibilidad de obtener beneficios o de poder tener pérdidas de un cambio político planificado normalmente es muy clara para los miembros de estos grupos desde una etapa muy inicial del proceso, lo que les proporciona el tiempo necesario para movilizarse y hacer lo necesario. Los empresarios, lógicamente, están dispuestos a pagar por la influencia ejercida al Estado para defender sus intereses. Estos son “los eficientes”, los que están presentes en el día a día de los políticos y altos funcionarios y que saben cómo integrar sus intereses en la política gubernamental, sea de forma pública y clara o silenciosa y efectiva. “La mayoría” que pierde como consecuencia de la consiguiente redistribución de prosperidad, por ejemplo los ciudadanos afectados por la contaminación en diversos pueblos, son –a menudo– incapaces de organizarse de forma que puedan oponerse eficazmente a las maquinaciones

20 “Airport a silent witness to Spanish boom”, *Financial Times*, 24.2.11.

21 “The white elephants that dragged Spain into the red”, BBC, 26.7.12.

22 Krueger, Anne (1974). “The Political Economy of the Rent-Seeking Society”. *American Economic Review* 64(3): 291-303.

23 Olson, M. (1968). *Die Logik des kollektiven Handelns*, Tübingen.

de aquellos pocos. Además, los ciudadanos muchas veces desconocen si salen beneficiados o perjudicados por una determinada política del gobierno.

En 1982, en *The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities*,²⁴ Olson afirmaba que la “búsqueda de rentas” tiene el potencial de llevar a una nación entera al abismo. Cuando los grupos de interés se organizan para conseguir “rentas”, se reduce la innovación y la productividad. No querría ser malinterpretado: por supuesto que en una democracia es normal que cada uno intente promover sus propios intereses y que las empresas y las asociaciones también lo hagan. El problema surge cuando el equilibrio entre los diversos intereses y la sociedad se ha roto, cuando algunos individuos tienen demasiada influencia sobre las decisiones políticas y cuando en nuestras democracias las instituciones de la soberanía popular van perdiendo despacio pero ininterrumpidamente su poder.

En un estudio reciente, los politólogos Martin Giles y Bill Page demostraron que en realidad esto sucede sistemáticamente.²⁵ Examinaron 1.799 cambios legislativos de los Estados Unidos entre 1981 y 2002 e identificaron qué ideas habían influido más en el resultado final. ¿El de la mayoría de los votantes, el de los grandes grupos de interés, el de las élites sociales o el de los lobistas de la élite económica? Gracias a un certero análisis de los datos, mostraron que es el cuarto: los grupos de interés organizados controlan la acción política.

3.2 Captura de la regulación

La idea del lobby como el ejercicio de una cierta influencia sobre el Estado y sus representantes está muy lejos de la auténtica realidad. Sería incluso capaz de afirmar que sería muy bueno si fuera así, si los lobistas ejercieran su influencia desde fuera del Estado. Muy a menudo la situación es mucho peor. George J. Stigler, premio nobel de economía, explica cómo las compañías se infiltran sistemáticamente en las autoridades reguladoras y han llegado a acuñar una expresión para el proceso: “captura de la regulación”.²⁶

Stigler describe cómo las compañías dan forma a las normas del Estado para aumentar sus beneficios. En casos

extremos, el Estado es incapaz de hacer cumplir la legislación porque sus instituciones simplemente han sido tomadas por los que debería vigilar.

La captura de la regulación es particularmente eficiente cuando el regulador y el regulado tienen una relación tan cercana que las fronteras entre los dos ya no están claras. Esto tiende a pasar cuando los individuos de los dos lados son de esferas sociales similares, comen juntos al mediodía y tienen debates sobre los resultados de nuevas investigaciones. La única diferencia entre ellos es que unos se supone que tienen que supervisar plantas nucleares, mientras que los otros intentan gestionarla de la forma más provechosa económicamente hablando. Unos se supone que deben prevenir que los bancos tomen demasiados riesgos, mientras que los otros están intentando ganar el máximo dinero de ese riesgo. De esta forma, tarde o temprano llega un desastre.

3.3 Una simbiosis peligrosa

Los consorcios público-privados –PPPs en sus siglas en inglés– son otro mecanismo para beneficiar a políticos y grandes empresas. El concepto es simple: en vez de pedir dinero para financiar grandes proyectos y luego gestionarlos, el Estado delega la construcción y la gestión de dichos proyectos al sector privado y paga durante, por ejemplo 30 años, un alquiler por dicha infraestructura.

¿Suena bien, verdad? En realidad, sólo es la mitad de la historia. Este tipo de acuerdo promueve una vía para financiar proyectos que sistemáticamente evita una alternativa a la larga más barata. Otra vez los contribuyentes pagan al final los beneficios de las empresas privadas. Esto es así por las diferencias de intereses: el Estado siempre puede obtener dinero de los bancos o instituciones a un interés más bajo que el que pueden asegurarse las compañías privadas.²⁷

Los que se benefician son las empresas que obtienen los contratos, los bancos que conceden los créditos a un interés más alto, los consultores y abogados que colaboran en la redacción de los contratos y también los políticos. Los PPPs funcionan como un presupuesto a parte: a los ciudadanos se les explica que no hay un aumento de la deuda porque no

24 *The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities*. New Haven: Yale University Press. 1982. ISBN 978-0300030792.

25 Gilens, M., & Page, B.I. (2014). Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens. *Perspectives on Politics*, 12(03), 564-581.

26 Stigler, G.J. (1971). “The Theory of Economic Regulation” in *Bell Journal of Economics*, 2(1), pp. 3-21.

27 Rechnungshof beklagt teure Fehler bei Großprojekten, *Focus*, 25.5.2013.

es la administración quien formalmente adquiera el crédito. Pero es de locos creer que es una manera más barata de financiar proyectos. No puede ser *per se*, ya que el gobierno deberá pagar a las empresas constructoras durante 30 años y al final debe desembolsar una cantidad mayor que si hubiera pedido el crédito por su cuenta directamente.

Para realmente entender la situación, estos ejemplos deben ser contemplados en su totalidad. No es una descripción correcta del problema afirmar que los lobistas simplemente

se acercan a los que toman las decisiones e intentan influenciarles. Hablamos de una simbiosis de mutuo beneficio entre el Estado y los que deciden las políticas económicas. Continuas alianzas por intereses comunes se están tejiendo continuamente en la densa red existente entre partidos políticos y grandes corporaciones. Directores de empresas y representantes de asociaciones económicas son muchas veces miembros de partidos políticos y, por ello, tienen acceso privilegiado a su congéneres en el parlamento y en el gobierno, que a su vez buscan su apoyo y amistad.

4 Salidas al dilema

Para muchos, el Estado ya no es “nuestro” Estado. Les pertenece a “ellos”, no a “nosotros” y algunos políticos están demasiado dispuestos a manejarlo para “sus” intereses. Esta es una de las razones por las que los políticos han caído en desgracia. La mayoría de la población no nos ve luchando por sus legítimos intereses.

4.1 Izquierda contra derecha, el debate erróneo

En el debate entre los que defiende un mayor papel del mercado y aquellos que defiende el papel del Estado, se considera automáticamente que estas dos posturas ocupan claras posiciones en el espectro político. El mito perpetuado por los medios de comunicación, los politólogos y también los propios políticos es que los amigos del mercado están a la derecha, mientras que los amigos del Estado se sitúan a la izquierda. Entre los primeros están los liberales y los conservadores, corrientes que promueven un orden social en el que las fuerzas libres del mercado conducen a resultados eficientes y por tanto deseables. Entre los segundos se sitúan los social-demócratas, los socialistas y muchos de nosotros, los Verdes. Defendemos un estado del bienestar que implica una sociedad un poco menos libre pero mucho más segura. Pero hoy en día, ¿es realmente cierto?

La dicotomía entre la izquierda pro-Estado y la derecha pro-mercado no sólo está obsoleta sino que dicha separación en realidad nunca ha existido. De hecho, disfraza lo que realmente está pasando y nos coloca a la izquierda a la defensiva. No deberíamos permitir que esta falsa percepción se imponga.

El libro del economista norteamericano Dean Baker, *The Conservative Nanny State*²⁸ fue muy importante para mí, ya que me permitió entender el auténtico significado político de este fenómeno.²⁸ Baker cuestiona el posicionamiento de la izquierda en el debate tradicional “mercado contra Estado”. Da numerosos ejemplos en los que la izquierda ha tomado posiciones a favor del mercado, mientras que la derecha ha defendido la protección del Estado a intereses privados y ha disfrazado con la retórica de la libertad de mercado beneficios y ayudas a unos grupos concretos. La verdad es que el “Estado niñera” se dedica a cuidar, pero sólo a unos pocos y no a la mayoría.

Los conservadores, tanto en USA como en Europa, no están de ninguna de las maneras a favor de un mercado más grande y un Estado más pequeño! Están a favor de un Estado diferente del que defiende la izquierda. Lo que quieren es un Estado que se cuide de las clases superiores y que organice al gobierno central de tal manera que sirva a sus intereses. Al afirmar que sus postulados defienden las fuerzas del libre mercado, están creando un falso debate. Según Baker, la izquierda ha seguido este debate no sólo por su fe en el Estado, sino porque ha perdido la poca que tenía en el mercado. En vez de analizar a fondo cómo los conservadores, a pesar de su retórica del libre mercado, están ordeñando en su favor al Estado, la izquierda instintivamente responde con argumentos defensivos y reacciona con llamamientos a un Estado más fuerte.

Este enfoque es totalmente erróneo. Los gobiernos deben intervenir en una etapa mucho más temprana para

²⁸ Baker, D. (2006). *The Conservative Nanny State*. Washington (DC).

poder fijar las reglas operativas del mercado de tal manera que los resultados sean mucho más justos. En palabras de Dean Baker: “Es mucho más fácil dejar que el río siga su curso normal que no tratar de bloquear su camino e intentar que fluya hacia atrás”.²⁹

4.2 El control del poder del Estado

Independientemente de si es la izquierda o la derecha quien dirige el Estado, algo tiene que cambiar. Todos somos “el Estado” y debemos trabajar conjuntamente para revertir su explotación y corrupción por parte de algunos y ayudar a asegurarnos que sirve otra vez al conjunto de la ciudadanía. Debemos restablecer el balance de poder en el Estado. Buchanan lo dijo de forma sucinta: “Los buenos juegos depende más de buenas reglas que de buenos jugadores”.³⁰ Debemos establecer reglas que sirvan a los intereses del conjunto de la sociedad. Tan importante como los contenidos son las condiciones institucionales que aseguren, desde el principio, que aquellos que representan el bien común pueden trabajar mejor que aquellos que representan grupos de intereses particulares.

Tiempo para políticas progresistas en Europa

La reorganización del Estado, la disminución de la influencia de las grandes empresas en la política, la creación de una democracia que sirva a la gente pueden sonar a titulares ambiguos e irreales. Pero no es cierto en absoluto. De hecho existe un precedente histórico de una reforma muy parecida.

Entre el final de la guerra civil americana en 1865 y el final del siglo XIX hubo un crecimiento económico espectacular en los Estados Unidos. Uno de los factores decisivos en dicho auge fue la presencia de grandes corporaciones financieras con grandes inversiones que se convirtieron en los principales actores de la revolución industrial. La consecuencia negativa de este proceso fue la monopolización de los mercados. Estos grupos abusaron del Estado para reforzar sus posiciones de la misma manera que lo hacen hoy en día.

Como reacción a esta situación, un vasto número de reformadores sociales de diferentes ámbitos formó el movimiento progresista. Unidos por el propósito de salvar la democracia y la economía de mercado, intentaron crear una sociedad en la que toda la gente, sin importar su nivel, se pudiera beneficiar de los progresos en marcha.

Para poder volver a poner bajo control a los grandes grupos financieros, los progresistas introdujeron una serie de reformas. Las instituciones públicas, que hasta aquel momento habían operado sólo a nivel estatal y no federal, fueron centralizadas. Lo que incluía, por ejemplo, la fundación de la Reserva Federal (el banco central de USA) y la Comisión Federal de Comercio (FTC). Una segunda medida fue activar medidas estatales para proteger de forma activa la competencia. Fue aprobada, por ejemplo, la ley antitrust de Sherman que establecía nuevos estándares y que fue gradualmente reforzada y ampliada con el paso del tiempo. Finalmente, al calor de numerosos escándalos debidos a la libertad absoluta otorgada a la maximización de beneficios, la protección de los consumidores también fue reformada. Todas estas medidas pusieron al Estado en condiciones de desarrollar políticas para servir al bien común y no a las grandes compañías.

Lo que ahora necesitamos en Europa es la creación de un movimiento progresista similar. Debemos dismantelar las estructuras de poder económico-políticas y nos debemos unir a nivel europeo. Hoy, como entonces, se requiere la participación de los sectores sociales mayoritarios y no de algunos radicales. Y, ahora y entonces, debemos evitar caer en rivalidades nacionales, no son los alemanes los que tienen un problema con los austríacos que esquivan el impuesto de plusvalías o con los holandeses porque las corporaciones pueden evitar impuestos por tener filiales en Holanda. No, el problema es entre los que se benefician de un sistema que permite que los ricos o eviten o evadan sus impuestos y la mayoría de los europeos que los pagamos. Aunque muchos políticos intenten que nosotros, los ciudadanos, nos creamos otra cosa, esta situación existe en todos los Estados. Para poder enfrentarse a poderosas corporaciones en condiciones de igualdad es esencial contar con instituciones efectivas a nivel europeo.

Cambiando el equilibrio de poder

¿Qué se puede hacer? En mi opinión, el Estado es demasiado débil en relación a las grandes empresas, el parlamento es demasiado débil en relación al gobierno y los ciudadanos son demasiado débiles en relación a los políticos profesionales y los partidos políticos. Y entre los diferentes grupos de interés, las grandes corporaciones tienen las mejores opciones para conseguir sus objetivos y hacer que sus ideas influyan en las políticas que se llevan a cabo. Este “equilibrio”

²⁹ Baker (2006), p. 107.

³⁰ Buchanan, J.M., & Brennan, G. (1985). *The Reason of Rules: Constitutional Political Economy*, Indianapolis (IN), p. 167.

de poder puede y debe ser cambiado. Los representantes del Estado deben ser empoderados. Una vez le hice una pregunta banal a un director de un banco mundial: “¿Sabe realmente la autoridad gubernamental que supervisa los bancos lo que hacen hoy en día? La respuesta del director fue admirablemente corta y sucinta: “Hacemos lo necesario para que lo entiendan”. Esta simple frase resume la gravedad del problema. No es sólo que los bancos (y otras grandes corporaciones) son demasiado grandes y complejos y sus actos demasiado opacos, sino que en muchas ocasiones las instituciones tienen escasa capacidad para lidiar con ellas en un plano de igualdad. De ahí que dependan de su buena voluntad. Es por tanto esencial que tengamos a los mejores expertos trabajando para el Estado. Únicamente personal bien cualificado en los diferentes ministerios puede plantear una legislación no sometida a las influencias de las corporaciones y de sus representantes legales.

También debemos reforzar los parlamentos. Tengo experiencia personal sobre el desequilibrio de existente dada mi experiencia diaria en el parlamento alemán. En Berlín, la media de lobistas por parlamentario es de 8.³¹ Claro que no están repartidos de igual forma en todas las áreas de trabajo. Se concentran especialmente en los ámbitos de salud y finanzas. Cuando tengo en mi mesa temas importantes y complejos relacionados con la legislación fiscal o financiera, no puedo vislumbrar todas las implicaciones de las nuevas propuestas dado que tengo solamente un pequeño número de ayudantes. El peligro de que uno recurra a las explicaciones de las asociaciones de empresarios –ellas sí con un buen número de expertos– está siempre presente. En Bruselas, la media es de 20 lobistas por parlamentario.

Los parlamentos deben ser reforzados, no sólo en relación a los empresarios sino también en relación a los gobiernos. Se presupone que a través de varios mecanismos de control, los parlamentos corrigen las decisiones erróneas de los gobiernos. En realidad, tanto los parlamentos nacionales como el europeo no tienen los recursos para hacer medianamente bien esta labor. Muchas propuestas legislativas lo son a requerimiento del gobierno o de instituciones del ejecutivo. Incluso en el caso de pequeñas medidas regulatorias, los miembros del parlamento que pertenecen al partido gobernante buscan asesoramiento entre los altos cargos ministeriales para asegurarse de que no meten la pata.

Por tanto, para fortalecer los parlamentos debemos repensar la distribución de los recursos. Funcionarios de los ejecutivos o de la Comisión Europea deben formar parte de los comités parlamentarios donde se debaten las leyes. En los Estados Unidos el poder legislativo tiene sus propios expertos que son independientes de los partidos. Los políticos a nivel individual pueden pedirles que examinen los borradores y las propuestas de ley. Hay cerca de 4.500 expertos haciendo este trabajo en el Congreso, incluyendo 750 en el Servicio de Estudios. Por el contrario, el mismo servicio del parlamento alemán cuenta sólo con 60 técnicos para redactar informes. Necesitamos, en interés del contribuyente, una nueva cultura de control. Obviamente, no se eliminarán los errores, pero permitiría que se descubrieran muchos antes y, así, se limitarían los daños a los ciudadanos.

Participación pública y conocimiento independiente

Debemos fortalecer la democracia directa. Los ciudadanos son la base de la sociedad. El Estado debe ser su asociación –una cooperativa de los ciudadanos–, no una instancia superior que les tutele.

Aunque las decisiones adoptadas por la vía de la democracia directa no son necesariamente mejores que las que surgen del parlamento, este método implica un mayor debate y la inclusión de muchos argumentos que podrían haber sido o ignorados o rechazados. Lo mismo ocurre con la planificación de las grandes infraestructuras. Cuanto antes estén los ciudadanos implicados, más capaces serán de contribuir con sus conocimientos y, al final, se plantearán menos protestas.

La participación pública debería ser complementada mediante los lobbies del bien común. Desafortunadamente, no es tan fácil contar con ellos cuando se tratan casos complejos de regulación financiera, por ejemplo. Finance Watch, una organización independiente, es una de las pocas excepciones. Fue fundada en 2011 por parlamentarios de todos los partidos –incluyendo al eurodiputado verde Sven Giegold– como contrapoder del excesivamente poderoso lobby financiero. Fue un movimiento importante, los parlamentarios tienen al fin una alternativa a los informes parciales de los expertos de bancos, seguros y fondos de inversión. Organizaciones como Financial Watch rechazan contribuciones económicas de personas e instituciones con conexiones en el mundo financiero o con partidos políticos. Finance Watch está haciendo un gran

31 Bülow, M. (2010). Wir Abnicker. Über Macht und Ohnmacht der Volksvertreter, Berlin, p. 181.

trabajo y se ha convertido rápidamente en una de las organizaciones más consultadas sobre aspectos ligados a la regulación de los mercados financieros.

Mayor transparencia

Las decisiones gubernamentales y políticas deben ser razonadas y justificadas, si no la democracia no puede funcionar. La transparencia no es un fin en sí misma y no lo arregla todo. La transparencia es una condición previa para entender las decisiones políticas y, gracias a las oportunidades para la participación en la toma de decisiones, proporciona un halo a las decisiones que se toman.

Algunas veces me aconsejan no alertar a la opinión pública de un problema –aunque ya me gustaría– porque alguna de la información que me ha proporcionado el gobierno es “secreta”. En estos casos me traen a mi oficina un documento que debe ser guardado en la caja fuerte o me piden que deje mi oficina y vaya a una zona top-secret en el parlamento alemán porque el nivel de secreto es tan alto que no puedo tomar ni notas.

Cada viernes cuando hay sesión parlamentaria, esta confidencialidad toma otra forma. Media docena de colegas de todos los partidos se reúnen con funcionarios especialmente autorizados en el llamado “comité del mercado financiero” o caucus. Aquí es donde el gobierno tiene que pasar cuentas de los miles de millones de euros de los contribuyentes que han sido transferidos a instituciones financieras (o no se han aplicado las garantías subscritas) en el curso del rescate bancario. Una señal sonora y un rótulo lumínico rojo con la palabra “clasificado” señala que ninguna información obtenida en esta reunión puede ser utilizada fuera del caucus.

Entendí perfectamente las consecuencias de esta forma de hacer cuando los bancos europeos tuvieron que ser rescatados. No se ha hecho ningún intento para que los acreedores contribuyeran proporcionalmente a los costes de la crisis financiera. Así, los hechos fueron mantenidos en secreto y se evitó el debate público. El primer ministro irlandés, Michael Noonan, sostuvo que era imposible conocer la identidad de los titulares de los bonos emitidos por los bancos. Su colega español, Luis de Guindos, consideró que esta información “no era importante”. Jörg Asmussen, un miembro de la junta del Banco Central Europeo, definió

esta información como “secreto comercial”.³² Esta premisa de los que rescataron a los bancos nos evitó conocer la identidad de los acreedores y de valorar (después del rescate) si hubieran podido o no participar parcialmente de los costes. Si esta información hubiera sido pública, habría sido posible debatir sobre las formas de rescatar a los bancos. Incluso hoy en día los gobiernos tratan la identidad de estos beneficiarios como un secreto de estado. Yo creo que se debe acabar este secreto. Cualquiera que paga impuestos tiene derecho a saber dónde ha ido su dinero.

El secreto debe ser inviolable para información realmente sensible y la información “relevante sobre el mercado” no puede ser aireada en los debates públicos. Pero se etiqueta como “clasificada” mucha información que no lo merece. Como parlamentario me encuentro que muchas veces no puedo hablar sobre cuestiones problemáticas sin saltarme la ley. En esos casos, los intentos de controlar al gobierno no tienen ninguna garantía de éxito.

Más allá del tema de los documentos clasificados, los parlamentos deben ser más transparentes y deberían editar en la red más información comprensible del trabajo que realizan. Necesitamos un portal de información que destaque como los temas son tratados en Europa y en los estados miembros y que guarde todos los pasos y materiales del proceso legislativo. Se han dado algunos pasos, por ejemplo la página web dipbt.bundestag.de en Alemania, pero se debe avanzar mucho más. Una propuesta es poder consultar en la red las órdenes del día y las actas de los comités parlamentarios³³ y poder seguir en directo las reuniones de los comités a través de internet.

Hay una cuestión más importante: las leyes necesitan una huella legal. ¿Qué quiero decir? Tanto como ciudadano como parlamentario, me gustaría saber quién exactamente ha participado en la redacción de las propuestas que luego se convierten en leyes y quién propuso enmiendas al principio del proceso que luego han sido incorporadas al texto final propuesto al parlamento. Me gustaría que cada proyecto de ley incluyera una indicación del origen de cada una de los artículos. Así se podrían ver los “golpes” de los lobistas que tienen poca paciencia con los lentos procedimientos parlamentarios y prefieren simplemente dictar las “clausulas” correctas al principio del proceso legislativo.

32 Citado en Schumann, H. (2013). “Staatsgeheimnis Bankenrettung” in *Tagesspiegel*, 24.2.2013. <http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/eurokrise-staatsgeheimnis-bankenrettung/7826402.html> (8.10.2013).

33 Cf. Bündnis 90/Die Grünen (2013). *Bundestagswahlprogramm 2013*. http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Wahlprogramm/Wahlprogramm-barrierefrei.pdf (8.10.2013).

5 Más Estado para contener a un mercado más fuerte

Instituciones estatales que fracasan en su labor y se dejan manipular descaradamente, burocracias que se cruzan en el camino de sus ciudadanos en vez de servirlos, normas gubernamentales ineficaces, inmensas sumas de dinero malgastadas, nepotismo, mala gestión... Como ciudadano me quedo a menudo sin palabras frente a tantos ejemplos del fracaso del Estado.

El fracaso del mercado y del Estado no pueden separarse. Pero ¿qué podemos hacer? No es suficiente simplemente con dar más poder a las instituciones políticas y que los mercados sean mejor regulados. Con la imagen que tienen actualmente muchos ciudadanos de las instituciones y de los políticos parece una propuesta vacía. Lo que me impacta especialmente en muchas conversaciones con ciudadanos es el sentimiento de que “el Estado tampoco puede”.

Y este sentimiento no es únicamente alemán. Los griegos han visto cómo sus “políticos” divulgaban datos falsos y contraían deudas irresponsables. Incredulos islandeses e irlandeses aún se preguntan cómo fue posible que aquellos que estaban en cargos de responsabilidad en el gobierno y en las instituciones reguladores pudieran consentir el desarrollo de una burbuja financiera tan increíble. En España, las cajas de ahorro continuaron inflando la burbuja inmobiliaria aunque había explotado hacía ya tiempo en los Estados Unidos. En consecuencia, podemos ver que la política está en la picota en muchos países. Están más que justificadas las quejas sobre la corrupción, el clientelismo y el fracaso de los políticos para servir a los intereses ciudadanos.

Esta es la razón por la que el péndulo de la opinión pública no se dirige automáticamente hacia el Estado, incluso después de haber experimentado el peor exceso del mercado. A pesar de los negativos sucesos relacionados con las empresas privadas, la idea de una economía controlada por el Estado sigue siendo muy poco atractiva. Hay poca fe en la regulación a pesar de los miles de millones malgastados por culpa de los mercados financieros desregulados.

Llamamientos a un “Estado más grande” no solucionarán los problemas. ¿Cómo podemos hacer que la gente vuelva a confiar en el Estado cuando ha fracasado tan estrepitosamente como árbitro, planificador y regulador?

Debemos ser conscientes de que no debemos escoger entre un mayor rol del mercado y un Estado más fuerte. Frente al apoderamiento del Estado y la sociedad por parte de las corporaciones económicas, la respuesta es fortalecer el mercado fortaleciendo al Estado. Decir “Sí” a un Estado más grande y “Sí” a un mercado más competitivo no es ninguna contradicción. Lo opuesto a una economía de mercado no es una economía planificada, es una economía corporativista en la que la sociedad ha sido tomada por unos pocos oligopolios que abusan del Estado y sus ciudadanos para maximizar sus beneficios.

Las grandes corporaciones no deberían poder dictar las condiciones en las que vivimos. Necesitamos un Estado independiente que sea capaz de asegurar la competitividad de los mercados, un Estado que pueda, por tanto, promover el desarrollo libre y sostenible para todos.

La respuesta a las cuestiones de para quién está trabajando el Estado, en nombre de qué intereses está actuando y, en última instancia, a quién pertenece, es de vital importancia. El poder del Estado puede ser un problema cuando es controlado por la economía corporativista, ya que se convierte en “su Estado”. Esto es justamente lo que se debe evitar. La democracia solo puede funcionar si confiamos en que nuestros representantes elegidos se preocupen de nuestras preocupaciones, que las leyes sean redactadas de acuerdo con nuestras necesidades y nuestros gobiernos actúen como deberían hacerlo. El Estado debe existir para que otra vez actúe en nuestro provecho, este debe ser el objetivo los políticos progresistas europeos en los próximos años. El Estado debe actuar de acuerdo con su responsabilidad con la sociedad y no a favor de las grandes empresas.

* Los bancos regionales alemanes son los equivalentes a las desaparecidas cajas de ahorro en España (Nota del traductor).

** Berlín es una ciudad estado, junto con Hamburgo tiene el estatuto de región (Nota del traductor)

*** Empresa pública de ferrocarriles (Nota del traductor)

**** El Estado niñera conservador (Nota del traductor)